

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 15º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-26420-2016
CARATULADO : ASOC CHILENA DE SEGURIDAD / EMPRESA
NACIONAL DE MINERIA

Santiago, veintidós de Febrero de dos mil diecinueve

Vistos:

Comparece Cristóbal Cuadra Court, Abogado, mandatario judicial y en representación de la Asociación Chilena de Seguridad, quien interpuso demanda de cobro de pesos en contra de la Empresa Nacional de Minería con el fin que el Tribunal declare y ordene lo siguiente:

1.- Que la Empresa Nacional de Minería le adeuda y se encuentra obligada a pagar a la Asociación Chilena de Seguridad, la suma de \$87.813.720, más reajustes e intereses, en virtud de la obligación que le impone a la demandada el artículo 57 de la Ley N°16.744, en su calidad de ex administradora delegada del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de concurrir al pago de las indemnizaciones causadas por enfermedades profesionales que afectaron a los trabajadores que se singularizan en el escrito pretensor, todos quienes trabajaron para la demandada al momento que ésta detentaba la calidad de administradora delegada de señalado seguro y que a la época en que se inició su invalidez se encontraban afiliados a la Asociación Chilena de Seguridad la cual pagó la totalidad de las respectivas indemnizaciones.

Añadió en el libelo pretensor que los veinte trabajadores que detalla en el cuerpo de la presentación y en virtud de las coberturas efectuadas, la Empresa Nacional de Minería le adeuda a la Asociación Chilena de Seguridad, la suma de \$87.813.720, más reajustes, intereses y costas, en virtud de la obligación que le impone a la demandada el artículo 57 de la Ley N°16.744, en su calidad de ex administradora delegada del seguro social contra riesgos de accedentes del trabajo y enfermedades profesionales contemplado en la citada ley.

Comparece RODOLFO BOTTESELLE RODRÍGUEZ, Abogado, en representación de la **EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA** y contestó la demanda incoada en su contra y alegó en primer término excepción de prescripción de la acción para hacer efectivas eventuales obligaciones contenidas en la ley 16.744 y el Decreto Supremo 101 en empresas cuya administración delegada fue revocada. Alegó como excepción subsidiaria de prescripción de la acción para demandar parte de las sumas demandadas;



y en cuanto al fondo impetró que la demanda sea rechazada en todas sus parte,s por inexistencia del supuesto básico para que su representada puede ser responsable de los pagos reclamados –alegó- que niegan expresamente que el hecho de trabajar en la Empresa Nacional de Minería durante el tiempo en que la empresa administró el seguro de accidentes del trabajo, haya causado o contribuido a causar las enfermedades que ellos han padecido, ya que a la fecha de revocación a ENAMI de la administración delegada, ninguna de estas personas había sido diagnosticada ni mostraba síntomas de las enfermedades que después habrían padecido y es perfectamente posible que todas ellas hayan contraído enfermedades profesionales en forma posterior a la revocación a ENAMI de la administración del seguro.

Finalmente alegó que en el evento de acogerse la acción interpuesta que los respectivos reajustes e intereses, se devenguen desde que la sentencia definitiva haya sido ejecutoriada, ya que la obligación de pago solo nace con la dictación de la correspondiente sentencia.

Compareció Pablo Caglevic Medina, por la demandante, evacuando el traslado de la réplica, haciendo valer todo lo anteriormente expuesto en su demanda.

Consta que Rodolfo Botteselle Rodríguez, Abogado, evacuó el traslado de la dúplica, ratificando en todas sus partes lo indicado en el libelo de contestación dela demanda.

Llamadas las partes a Conciliación, ésta no se produce, por cuanto no compareció la parte demandada.

Se recibió la causa a prueba fijándose los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos.

Consta que con fecha 14 de junio de 2018 con la dictación de la resolución respectiva la causa quedó en estado de ser fallada.

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LAS EXCEPCIONES OPUESTAS POR LA DEMANDADA.-

PRIMERO: Que el apoderado de la demandada EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, opuso la excepción dilatoria de ineptitud de la demanda, por carecer de antecedentes de hecho y fundamentos de derecho. Pidió que el Tribunal desestime en todas sus partes la acción por no dar estricto cumplimiento a lo prescrito en el número 4 del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil;

SEGUNDO: Que se procederá a rechazar la excepción deducida por la demandada, ya que a juicio del Tribunal, el libelo pretensor cumple con supuestos fácticos y normativos consignados en el artículo 254 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, y tal es así que la Empresa Nacional de Minería, evacuó el traslado conferido y contestó el



fondo de la acción incoada, estableciéndose la relación jurídica o “litis” entre los litigantes y que obliga al este sentenciador, a resolver el asunto sometido a su decisión;

TERCERO: Que la parte demandada expresó que el plazo de prescripción de las acciones contenido en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil empezó a correr el día en que fue revocada la administración delegada a ENAMI, encontrándose completamente cumplido, sin interrupciones ni suspensiones, respecto de cualquier obligación de ENAMI. En subsidio, opuso excepción de prescripción de la acción intentada en contra de la demandada, rechazando el libelo pedidor respecto de todas las supuestas concurrencias por un total de \$39.253.717.-, que se habrían devengado con anterioridad al día 12 de diciembre de 2011, esto es, hace más de 5 años, contados de la fecha de notificación de la demanda;

CUARTO: Que se rechazarán la excepciones de prescripción opuestas por la parte demandada, ya que, a juicio del Tribunal el plazo de este instituto civil, en el caso sublite, se cuentan desde el vencimiento del término de 30 días hábiles contados desde la data de recepción del requerimiento realizado por el organismo pagador del beneficio, tal como lo establece la normativa pertinente. Ahora bien, en concepto del Tribunal, la interrupción de la prescripción opera una vez interpuesta la demanda, al tenor de lo dispuesto en los artículos 2503 y 2518 del Código Civil. En efecto, otorga más certeza y seguridad jurídica a una parte contar el plazo de prescripción desde que ésta interpone materialmente la demanda, no quedando al arbitrio de su válida notificación a través de un tercero, la data para el cómputo de su plazo; es por ello que los plazos de autos para incoar la acción respectiva se encuentran vigentes, desestimándose las excepciones opuestas;

I.- EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL.-

QUINTO: Que la parte demandante con el fin sostener y avalar su libelo pretensor de cobro de pesos indicado en lo expositivo de esta sentencia, rindió la siguiente prueba documental:

-Expedientes relativos a la indemnización por enfermedad profesional que fueron pagados por la Asociación Chilena de Seguridad , a los ex trabajadores de la Empresa Nacional de Minería: Pedro Iván Gaitán Sambra, Julio Guillermo Zamora Cáceres, Luis Gonzaga Alzamora Castro, Carlos Barra Díaz, Francisco Solano Ayala Pizarro, Ociel Humberto Sola Sola, Roberto Baeza Silva, Guillermo Patrocinio González Salinas, José Alberto Varas Ramos, Luis Alejandro Zepeda Gómez, Juan Segundo Peralta Copa, Rogelio Servando Cáceres Santis, Orlando Omar Gómez Contreras, Abel Antonio Julio Fredes, Carlos Humberto Vicencio Juárez, Raúl Vargas Lizama, Alfonso Alberto Rojo Varas, Daniel Segundo Santander Barraza, Óscar Aníbal Castillo Contreras, Luis Alejandro Zepeda Gómez, Omar Vicente Guerra Jeldes y Germán Carlos Barra Díaz;

- Copia de la carta de fecha 21 de junio de 2016, que la Asociación Chilena de Seguridad le envió a la Empresa Nacional de Minería.



- Carta de fecha 21 de julio del año 2016, que la Empresa Nacional de Minería le envió a la Asociación Chilena de Seguridad;
- Oficio ordinario N°12.831, de fecha 7 de julio del año 1998, emitido por la Superintendencia de Seguridad Social;

SEXTO: Que la actora rindió prueba pericial contable de Jaime Aliro Acevedo Silva, con el objetivo que informara al Tribunal respecto del monto que la Empresa Nacional de Minería le debe pagar a la Asociación Chilena de Seguridad, en su calidad de ex administradora delegada del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales contemplado en la ley;

SÉPTIMO: Que del análisis de la prueba documental legalmente incorporada en autos y legislación aplicable en la especie, se puede concluir que a la demandada se le enteraron cotizaciones de seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, por los 20 trabajadores referidos sufra, a saber: Abel Julio Fredes, Carlos Vicencio Juárez, Roberto Baeza Silva, Guillermo González Salinas, Raúl Vargas Lizama, Alfonso Rojo Varas, Daniel Segundo Santander Barraza, José Varas Ramos, Juan Peralta Copa, Óscar Castillo Contreras, Rogelio Cáceres Santis, Orlando Gómez Contreras, Luis Zepeda Gómez, Pedro Gaitán Sambra, Julio Zamora Cáceres, Luis Alzamora Castro, Omar Guerra Jeldes, Germán Barra Díaz, Francisco Ayala Pizarro y Osciél Sola Sola; en circunstancias que la demandada tuvo la calidad de administradora delegada del mencionado seguro; trabajadores que luego fueron afiliados de la Asociación Chilena de Seguridad, mutual, que cumpliendo su función institucional pagó indemnizaciones por enfermedades profesionales padecidas por los operarios;

Que la Empresa Nacional de Minería tuvo la calidad de administración delegada hasta su revocación el día 1 de marzo de 2006, y de conformidad con el Decreto Supremo N°101, del Ministerio del trabajo y Previsión Social, la demandada contaba, como empresa, con administración delegada del Seguro Social de la Ley N°16.744, en relación con sus trabajadores, ya que concurrían a su respecto, las exigencias legales y, en esta condición, se hizo cargo del otorgamiento de las prestaciones que estatuye la ley;

Que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 57 de la Ley N°16.744, la Empresa Nacional de Minería demandada resulta obligada a concurrir al pago de las indemnizaciones provenientes de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que afectaron a los trabajadores indicados en el acápite primero de la motivación séptima de la presente sentencia y aun cuando la empresa haya renunciado a la calidad de administrador delegado, debe pagar las concurrencias a que haya lugar por las indemnizaciones que regula la Ley N°16.744;

OCTAVO: Que del informe pericial, evacuado por el experto contable Jaime Aliro Acevedo Silva, atendido el contenido, metodología y conclusiones del mismo, el que resulta en armonía y corroborado con otras piezas documentales del expediente, además de ceñirse a los principios científicos contables, según se desprende del acápite



“Desarrollo de la Pericia” , entre otros tópicos de su informe, el tribunal llega a la convicción legal, que el monto que la Empresa Nacional de Minería debe pagar a la Asociación Chilena de Seguridad, por concepto de enfermedades profesionales que afectaron a los veinte trabajadores, a saber, señores: Abel Julio Fredes, Carlos Vicencio Juárez, Roberto Baeza Silva, Guillermo González Salinas, Raúl Vargas Lizama, Alfonso Rojo varas, Daniel Segundo Santander Barraza, José Varas Ramos, Juan Peralta Copa, Óscar Castillo Contreras, Rogelio Cáceres Santis, Orlando Gómez Contreras, Luis Zepeda Gómez, Pedro Gaitán Sambra, Julio Zamora Cáceres, Luis Alzamora Castro, Omar Guerra Jeldes, Germán Barra Díaz, Francisco Ayala Pizarro y Osciél Sola Sola asciende a la suma de \$88.027.995;

NOVENO: Que la suma en concreto acogida por daño moral, se reajustará, según la variación que experimente el índice de precios al consumidor (IPC) que determine mensualmente el INE o el organismo que lo subrogue legalmente, desde la fecha de esta sentencia, hasta que la misma se encuentre ejecutoriada, más los intereses corrientes que se devengarán desde que el condenado civil se encuentra en mora de cumplir;

DÉCIMO: Que no se condenará al demandado al pago de las costas de la causa, ya que a juicio del Tribunal, ha tenido motivo plausible para litigar;

Por estas consideraciones, y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 2593 y 2318 del Código Civil; artículos, 144, 254, 302, y 341 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 57 y siguientes de la Ley N°16.744, artículo 70 del Decreto Supremo N°101, de 1968, **SE DECLARA:**

I.- EN CUANTO A LA EXCEPCIONES:

A) Que se rechaza la excepción de ineptitud del libelo deducida por la demandada, según lo expresado en el considerado segundo de esta sentencia.

B) Que, asimismo, se desestiman, las excepciones de prescripción opuestas por la parte demandada, por lo razonado en el considerando cuarto de esta resolución.

II.- EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

A).- Que se **ACOGE** la acción civil de cobro de pesos incoada por la actora Asociación Chilena de Seguridad y se condena a la Empresa Nacional de Minería a pagar la suma de \$88.027.995; más reajustes e intereses, según lo indicado en las motivaciones séptima, octava y novena respectivamente.

B).- Que cada parte pagará sus costas.

ROL N°26.420-2016.-

Dictada por Alejandro Aguilar Brevis. Juez Suplente.-

Autoriza doña Janet Herman Cornejo, Secretaria Subrogante.



Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintidós de Febrero de dos mil diecinueve**

